

Nubarrones: ¿en quién creer?, ¿en quién confiar?

Omar Serrano¹

Resumen

La encuesta de evaluación del año 2017 del IUDOP muestra un acentuado deterioro en la percepción de la población en prácticamente todas las dimensiones de la vida nacional y con prácticamente todos los actores sociales que tienen un papel en la construcción —o destrucción— del bienestar social. De cara al próximo proceso electoral, este descontento se viste de apatía porque sus protagonistas son, en gran medida, los mismos responsables de los males que prometen solucionar. En medio del preocupante vacío de representatividad, ARENA resultaría ganadora en los próximos comicios y surge la inquietud, para el 2019, sobre posibles alternativas electorales a los partidos tradicionales, dentro de los que ya se puede contar al partido de gobierno.

Palabras claves:

población, encuesta, gobierno, país, situación, opinión, partidos.

1 Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

¿Desesperanza o desencanto?, ¿pesimismo o realismo?

Es difícil decir con exactitud lo que más define en estos momentos a la sociedad salvadoreña, pero de alguna manera esos adjetivos nos dan una idea de cómo gran parte del pueblo salvadoreño ve la situación actual. Esta manera de percibir la realidad nos debe hacer reaccionar. Para la psicología, el pesimismo puede ser un rasgo que señala una depresión y las depresiones colectivas no llevan a buenos derroteros. En cualquier caso, tanto la percepción de la población como la situación del país demandan que no se puede ser indiferente ante lo que El Salvador vive. A esto es a lo que Ignacio Ellacuría llamaba “situación límite”, una situación tan hiriente ante la cual no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Nubarrones sobre el país

En los tiempos recientes, no pocas veces en el país se ha advertido sobre la crítica situación que atravesamos. La encuesta de evaluación del año 2017² del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) revela que también la población lo percibe así. Los resultados que fueron publicados a principios de enero de este año revelan que lo que en otras ocasiones hemos llamado “desencanto” de la población con la gestión de las autoridades del país se ha acentuado. Pocas veces encontramos una opinión crítica tan generalizada entre la población encuestada. Por crítica entendemos aquí lo que el *Diccionario de la lengua española* (2014) define como “inclinado a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma desfavorable”³. En efecto, la opinión de las personas consultadas es altamente desfavorable con respecto a casi todas las dimensiones de la vida nacional.

La valoración de la población encuestada entre el 18 y el 28 de noviembre del 2017 acerca de la situación del país al finalizar el año ha sido poco menos que implacable. El rostro más dramático de la crisis que vive el país es la situación de inseguridad que golpea sobre todo a la juventud de los sectores más pobres. En el periodo que inició desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero del 1992 hasta la fecha, el número de asesinados ya sobrepasó a los de toda la guerra civil (1980-1992). Se estima que, en los últimos 15 años, más de 60,000 salvadoreños han muerto violentamente. Esto es percibido por la gente como un problema todavía por resolverse. Más aún, la población no ve vestigios de que la situación esté mejorando. Para el 62.4 % de las personas que dieron su opinión en la encuesta, la delincuencia aumentó en el 2017 con respecto a 2016, el 25.6 % piensan que se mantuvo igual y solo un 12 % opina que disminuyó. En sintonía con lo anterior, 73 de cada 100 salvadoreños (73.3 %) creen que el principal problema del país está relacionado con la inseguridad pública (violencia, delincuencia e inseguridad). Cuando se les consultó a las personas su opinión acerca de la situación económica, las respuestas fueron semejantes. Solo el 6.5 % de los encuestados consideraron que la economía está mejor que en el 2016, mientras que más de la mitad de la población (51.4 %) consideró que empeoró y el 42.1 %, que siguió igual.

Esta tendencia se revela como una constante en casi toda la encuesta del IUDOP. Es decir, el juicio que estima que en el país las cosas no están mejorando, sino que siguen igual o empeoran, atraviesa todos los ámbitos de la vida nacional.

2 La encuesta completa con su ficha técnica puede consultarse en http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/BOLETIN_118.pdf.

3 Consultado en <http://dle.rae.es/?id=BKJHGzW>.

Tabla 1. Valoraciones de la situación del país

<i>Temática</i>	<i>Ha mejorado/ Disminuyó</i>	<i>Sigue igual</i>	<i>Ha empeorado/ Aumentó</i>
Pobreza	7.5 %	37.9 %	54.6 %
Respeto a los derechos humanos	9.2 %	51.9 %	37.5 %
Situación política	9.1 %	42.3 %	47.3 %
Migración	19.4 %	28.9 %	47.7 %

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de evaluación del 2017 del IUDOP.

Los nubarrones que la gente ve en casi todos los ámbitos de la vida nacional también ensombrecen la apreciación general sobre la situación del país. Ante la pregunta: ¿En su opinión, al terminar el 2017, nuestro país está mejor, está igual o está peor en comparación con el año pasado?, 92 de cada 100 encuestados consideraron que el país está peor (48.4 %) o igual (43.7 %). Solo el 7.6 % consideró que el país estaba mejor que en el año precedente. A diferencia de en otras ocasiones, esta especie de pesimismo se proyecta al futuro inmediato del país. 77 de cada 100 personas encuestadas opinaron que la economía en el 2018 estaría peor (46.2 %) o igual (30.7 %) que en el 2017. El 13 % tienen esperanza de que la economía mejore en el 2018 y el 10 % no respondió.

Por supuesto, la opinión desfavorable de la mayoría de la población no es gratuita. Siempre en el imaginario colectivo se deducen responsabilidades. En la difícil situación en la que se percibe al país, la primera factura la paga el Gobierno central que, aunque no de manera exclusiva, es considerado el principal responsable.

Seguridad: la gran deuda del Gobierno central

Las razones de por qué la población tiene una visión tan crítica de la situación que vivimos pueden atribuirse a varios factores, entre los cuales aparece como fundamental la reprobación del desempeño del Gobierno central. 67 de cada 100 encuestados piensan que el presidente Salvador Sánchez Cerén

está gobernando mal, 16 creen que está gobernando bien y 15, que no está gobernando ni bien ni mal.

¿Qué es lo que más le reprocha la población al Gobierno? El cruce de variables de la encuesta arroja resultados que dejan poco margen a la duda. Entre el 48.4 % de los encuestados que respondió que el país está peor que hace un año, el 44.3 % lo atribuye al aumento de la inseguridad y la delincuencia. Y, efectivamente, la lectura crítica de la situación es particularmente dura con el desempeño del Gobierno en materia de seguridad. 77 de cada 100 personas creen que las políticas de seguridad del Gobierno están reduciendo poco (41.2 %) o nada (36 %) la delincuencia. En lo que respecta a la implementación de medidas extraordinarias de seguridad, como el despliegue de tanquetas y soldados en las calles de San Salvador, la población encuestada también es muy crítica: 68 de cada 100 encuestados opinaron que esta medida redujo poco (32 %) o nada (35.6 %) la inseguridad.

Es decir, sin negar que existan otras razones de peso, de acuerdo a lo expresado por la población en la encuesta, la principal razón por la que se reprueba al Gobierno es porque sus políticas de seguridad no arrojan los resultados esperados. Otro argumento para sustentar este hallazgo es la valoración que la población hace del trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército. Entre las 15 instituciones por las cuales se consultó a la población sus niveles de confianza, ambas instancias son las que más bajaron en esa

percepción. La PNC pasó de gozar de mucha confianza para el 25.8 % de la población en el 2016 a 16.2 % en el 2017. El mismo comportamiento mostró la confianza de la población en el Ejército, que en el 2016 gozaba de mucha confianza para el 29.3 % de la gente y que se redujo en el 2017 al 21.9 %. Aunque, a nivel general, ambas instancias siguen gozando de valoraciones relativamente positivas de la población (relativas con respecto a las otras instituciones), en la encuesta del 2017 fueron las entidades que más decrecieron en la confianza que les profesó la gente.

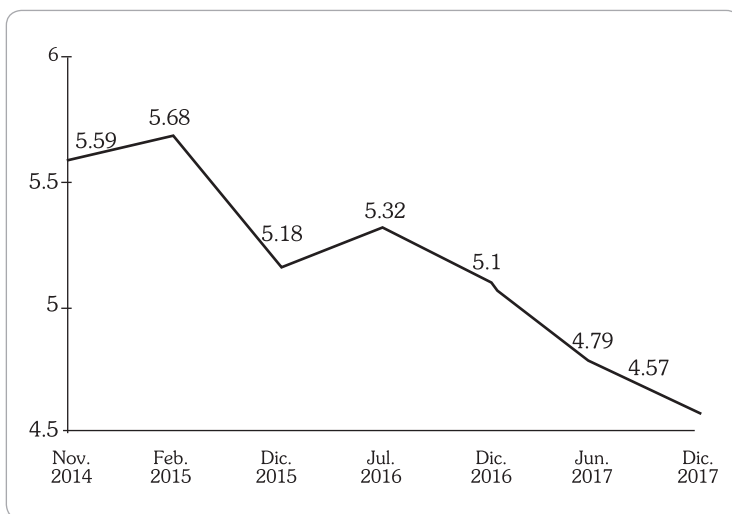
Pero la confianza en la PNC y en el Ejército no solo ha disminuido por su ineficacia para reducir el crimen. También la población les pasa factura a los excesos de fuerza y abusos en la aplicación de las medidas extraordinarias. 64 de cada 100 encuestados creen que en la implementación de esas medidas se respetan poco (45.6 %) o nada (18.5 %) los derechos humanos de la población. Especialmente lamentable es que 30 de cada 100 encuestados afirmen que han visto a algún policía maltratar físicamente a otra persona. Y más de la mitad de los que afirmaron eso (50.3 %) dicen que vieron esos atropellos entre dos y cuatro veces. El 6.9

% de los encuestados afirmó que había sido testigo de la ejecución de algún pandillero o presunto pandillero.

Un Gobierno al que se le acabó el compás de espera

El deterioro en la valoración que la población hace del desempeño del Gobierno central ha sido progresivo todos estos años. Por ejemplo, en el 2014, 15 encuestados le otorgaron mucha confianza al Gobierno, en el 2015 este número se redujo a 12 y a 10 en el 2016. En la más reciente evaluación del 2017, solo 8 de cada 100 personas expresaron tenerle mucha confianza. Si en la evaluación del 2017 el 67.1 % declara que piensa que el presidente Sánchez Cerén está gobernando mal, en el 2016 el porcentaje que pensaba lo mismo fue del 56.4 % y solo el 38.9 % en la encuesta del 2014. Lo que refleja muy bien el deterioro del desempeño del Gobierno central en la percepción de la población es la calificación que, en una escala de 0 a 10, le adjudicó. El 4.57 es la nota más baja otorgada por la gente encuestada a un Gobierno central, por lo menos desde el 2000 y de acuerdo a los registros del IUDOP.

Figura 1. El Gobierno de Sánchez Cerén en la perspectiva de la opinión pública



Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de evaluación del 2017 del IUDOP.

Si bien el factor que más pesa en el deterioro de la opinión favorable sobre el Gobierno, como ya se dijo, es la problemática en torno a la criminalidad y la delincuencia, en el análisis de los números hay por lo menos otros dos factores que están haciendo mella en la imagen del mismo: el primero es el cuestionamiento, en la percepción popular, a la capacidad de gobernar del presidente de la República. El segundo está relacionado con la situación económica que atraviesa el país.

La nota con que califican el desempeño gubernamental es el mejor indicador del descontento de la población con la imagen del presidente. El país tuvo, antes de Sánchez Cerén, a tres gobernantes mediáticos, con dotes sobresalientes para la oratoria y agilidad para salir al paso a las situaciones comprometedoras. El estilo de gobernar y la personalidad del actual presidente no dio continuidad a esas características, lo que, aunado a la permanente campaña de los grandes medios de comunicación militantes de la derecha política, que destacan por sobre todo las deficiencias de la gestión gubernamental (que no son pocas) y sobredimensionan los desaciertos verbales o de contenido del presidente, ha hecho que su figura afecte la percepción sobre el desempeño del Gobierno central en general. Lo contrario sucedía con los Gobiernos presididos por Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). En los tres casos, aun cuando la valoración de la gestión general del Gobierno fuese muy crítica, la valoración de la figura del presidente solía ser más positiva. Es decir, la figura de Sánchez Cerén le resta a la opinión que la población tiene del actual Gobierno, mientras que sus predecesores le sumaban. Obviamente, como ha quedado demostrado con suficiencia en nuestro país, la buena imagen del presidente no significa que su Gobierno ni él hayan sido buenos. La historia reciente más bien apunta en sentido contrario. Francisco Flores murió, en enero de 2016, en medio de un juicio por desviar millonarios donativos para ayudar a damnificados para fines particu-

lares y de su partido. A su muerte siguió la confirmación de dirigentes de ARENA de que por lo menos parte de los fondos llegaron al partido para una campaña política. Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República no ha seguido las investigaciones como si con la muerte del exmandatario hubiera muerto también el caso. Elías Antonio Saca está en prisión acusado de varios delitos, el principal fue el desvío de casi US\$ 250,000,000 de cuentas de Casa Presidencial hacia cuentas privadas. Mauricio Funes está refugiado en Nicaragua por acusaciones de corrupción en su contra. En noviembre del 2017, la Cámara Segunda de lo Civil condenó a Funes y a uno de sus hijos por enriquecimiento ilícito por más de US\$ 400,000. Después de tres años y medio de gobernar, al actual presidente Sánchez Cerén se le ha señalado sobre todo por su “mala imagen” y su falta de presencia, pero hasta hoy —y los signos parecen indicar que tampoco en el futuro— ha tenido señalamientos por corrupción.

El segundo factor que hace mella en el desempeño del Gobierno tiene que ver con la economía. La cara más visible de los problemas económicos son los números fiscales. A la pregunta sobre el principal problema del país al momento de la encuesta, una quinta parte de los encuestados vincularon sus respuestas a variables económicas (alto costo de la vida, desempleo y pobreza). Además, el 93.5 % de la población consultada opina que la situación económica en el 2017 empeoró (51.4 %) o sigue igual (42.1 %) con respecto al 2016. La opinión de la gente sobre el impacto del aumento al salario que entró en vigor a partir de enero del 2017 es también muy crítica. 78 de cada 100 encuestados piensan que dicho aumento mejoró poco o nada la economía familiar. Llamativa es la opinión de la gente con respecto a la reforma de pensiones, que supuso un alivio —solo eso, un alivio temporal— para las finanzas del Estado y que dejó contentos a los empresarios de las asociaciones de fondos de pensiones. Más de la mitad de la gente que participó en la encuesta (60.5 %) cree que dicha reforma

perjudicó a los trabajadores y solo poco más de una quinta parte (22.55 %) piensa que los benefició.

Así, la inseguridad como la gran deuda, la situación económica y la imagen del presidente son tres factores importantes que estarían ayudando a que la opinión de los salvadoreños sobre el desempeño del Gobierno se deteriore cada vez más.

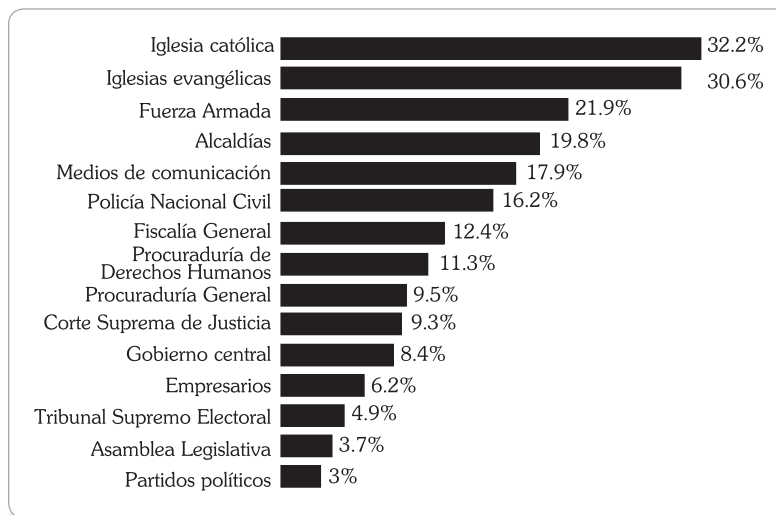
Descontento con el Gobierno. Desencanto con la institucionalidad en general

La opinión crítica generalizada de la población sobre la situación que vive el país no pasa factura solo al Gobierno central. También los otros poderes del Estado —que

también son parte del Gobierno— y hasta instituciones de la sociedad civil no quedan exentos de responsabilidad para la población.

La encuesta de evaluación de año de la UCA siempre consulta a la gente sobre la confianza que tiene en instituciones importantes en la vida nacional. De entrada, lo primero que impacta de la encuesta del IUDOP es que la confianza en la institucionalidad también ha sufrido un deterioro. Ninguna de las instituciones por las que se le consultó a la gente llega a gozar de “muchísima confianza” ni de la tercera parte de la población. Incluso las Iglesias, que tradicionalmente han sido —y siguen siendo— las depositarias de la mayor confianza, han bajado según lo expresan las personas en la encuesta.

Figura 2. Confianza institucional durante 2017



Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de evaluación del 2017 del IUDOP.

El gráfico de arriba refleja la respuesta de la gente en la que expresa “muchísima confianza” en las instituciones. Al lanzar una mirada retrospectiva a esta pregunta, se constata que 13 de las 15 instituciones consultadas bajan en la confianza ciudadana. Las únicas dos instancias que

experimentaron un leve aumento son los empresarios, que pasaron de gozar de mucha confianza en el 5.9 % de la población en el 2016 a recibir la del 6.2 % en el 2017, y la Corte Suprema de Justicia, que pasó del 8.5 % al 9.3 % en el mismo período. Sin embargo, a pesar de este

incremento, ambas instancias no se libran del juicio de la población y se mantienen entre las que más desconfianza ciudadana despiertan. Preocupante es que cinco de las instituciones más importantes para la vida

democrática encabezan la desconfianza de la población. Al agrupar las respuestas de poca o ninguna confianza, los resultados son desalentadores:

Tabla 2. Confianza institucional durante 2017

<i>Institución</i>	<i>Tienen poca o ninguna confianza en ella</i>
Corte Suprema de Justicia	76.4 %
Gobierno central	80.0 %
Tribunal Supremo Electoral	83.6 %
Asamblea Legislativa	87.4 %
Partidos políticos	88.8 %

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de evaluación del 2017 del IUDOP.

No es nuevo que los partidos políticos y su “espacio natural”, la Asamblea Legislativa, estén desacreditados para la población. Lo más preocupante es que, en pleno ciclo electoral, la instancia encargada de garantizar la limpieza de los procesos electorales ocupe la tercera posición en la desconfianza de la ciudadanía. Ciertamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como el Gobierno, ha sufrido un deterioro en la percepción de la población de manera gradual, sobre todo a partir de las elecciones legislativas y municipales de marzo del 2015, cuando hubo contratiempos para el escrutinio y para la transmisión de resultados, después de que una sentencia de la Sala de lo Constitucional decretó el voto cruzado, a menos de cuatro meses para las elecciones. De acuerdo a las encuestas del IUDOP, en noviembre del 2014, el TSE gozaba de mucha o alguna confianza para el 26.9 % de la población, porcentaje poco halagüeño, pero que ha resultado ser el más alto de los últimos años. En el mismo rubro (mucha o alguna confianza), la población le dio un 20.1 % en el 2015, un 18 % en el 2016 y un 16.4 % en el 2017. En la medida en que la confianza en el TSE decrecía, la desconfianza de la población ha venido incrementándose hasta llevarlo a ser la tercera institución en la que más desconfía la gente. Con esta realidad, llegaremos a las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo del 2018.

La realidad que nos pinta la opinión de los salvadoreños consultados por la encuesta del IUDOP muestra a una sociedad que está dejando de confiar en las instituciones más importantes para su vida democrática y para su desarrollo social. La gran interrogante que surge después de constatar esta situación es ¿en quién confían los salvadoreños? ¿En qué o en quién creen en este tiempo? Como se podrá imaginar, la respuesta a estas preguntas parece que no se encontrará en las próximas elecciones.

Elecciones 2018: ¿esperanza o amenaza?

Lo que hemos llamado “desencanto” de la población con el papel de los funcionarios públicos y la institucionalidad en general también contamina su disposición frente al proceso electoral que estamos por celebrar. Lo que más define la actitud de la población encuestada frente al proceso electoral es la apatía; apatía que no es de extrañar, pues los protagonistas de las elecciones encabezan la desconfianza ciudadana, como ya se vio arriba.

77 de cada 100 personas consultadas dijeron que tienen poca (42.5 %) o ninguna (34.8 %) confianza en el proceso electoral. El 67.4 % dijo tener poco o ningún interés en la campaña electoral. Como ya se apuntó, los

partidos políticos vuelven a quedar comprometidos en la percepción de la población. El 64 % dijo que no tenía un partido de preferencia, lo que se traduce, de acuerdo a la encuesta, en que 60 de cada 100 personas tengan poco (31.3 %) o ningún (28.6 %) interés en ir a votar en las próximas elecciones de marzo.

La sociedad salvadoreña parece tomar conciencia sobre la necesidad de dar un giro importante en la manera de hacer la política. Sus juicios son muy duros sobre los partidos y también sus exigencias. El 72.7 % de los encuestados dijo estar en desacuerdo con las campañas adelantadas y el 93 % declaró que no estaría dispuesto a votar por partidos políticos que fundamenten su campaña en agresiones e insultos.

¿Una decisión de minorías?

El escenario que nos dejan las opiniones sobre el proceso electoral, de conservarse hasta el día de los comicios, sería conveniente para los dos partidos políticos más grandes del país, pero inconveniente para la sociedad en general. Es decir, las elecciones amenazan con ser decididas por los votos duros de ARENA y del FMLN. Y en el actual escenario que vivimos y que ha retratado la encuesta del IUDOP, el virtual ganador de las elecciones sería ARENA. Para el 31.1 % de los encuestados, la imagen de ARENA ha empeorado en el último año. Sin embargo, el porcentaje que opina lo mismo sobre el FMLN alcanza el 52.4 %. Además, 28 de cada 100 encuestados (27.7 %) dicen que nunca votarían por ARENA, mientras que 38 (37.6 %) dicen que nunca lo harían por el partido de izquierda. Es decir, en la contienda electoral que definiría el voto duro de ambos partidos, el asunto decisivo no parece ser quién tiene más aspectos positivos, sino quién tiene menos negativos.

Los partidos políticos están cosechando lo que han sembrado. La desafección de un porcentaje considerable de salvadoreños hacia ellos y hacia el proceso electoral es la conse-

cuencia de haber postergado por demasiado tiempo trabajar de verdad por solucionar los graves problemas que afectan especialmente a la población con menos recursos. Lo que también los números de la encuesta del IUDOP reflejan es un vacío de representación de los intereses reales de la ciudadanía. Dicen que el arte de un partido político radica en aparentar que defiende el interés general cuando en realidad defiende intereses particulares (de ahí viene la definición de partido, que representa a una parte de la población). Este cuestionable enunciado que ha regido el accionar de los partidos ha sido desaprendido por las cúpulas partidarias. Parece que cada vez menos gente cree que los partidos representan sus intereses.

¿Una alternativa?

Este vacío de representación y el desencanto de la política partidaria es el que, aparentemente, quiere llenar Nayib Bukele, actual alcalde de San Salvador, que fue expulsado en octubre del 2017 del partido FMLN, con el que llegó a la comuna capitalina. La bandera de “campaña” de Bukele ha sido distanciarse de los dos partidos más grandes que han sido protagonistas de la polarización política heredada de la polarización militar de la guerra civil. La simpatía despertada por el alcalde, sobre todo entre la población más joven, radica en gran medida en la crítica feroz que Bukele ha hecho a los dos grandes partidos. Contrario a lo que la dirigencia del FMLN afirmó después de la expulsión de Bukele, la encuesta del IUDOP arroja que el 74 % de los consultados creen que esa expulsión le quitará votos en las próximas elecciones al partido de gobierno. En sentido contrario, 60 de cada 100 encuestados dicen estar dispuestos a votar por Bukele en un partido distinto del FMLN. La intención de voto resultante de la encuesta del IUDOP parece dar la razón a quienes opinaron que el partido de izquierda obtendrá menos votos en las próximas elecciones. No tenemos los elementos suficientes para afirmar que

esa disminución se deba a la expulsión del alcalde.

Hasta el momento, lo que se puede asegurar de Bukele, con respecto a las elecciones del 2019, son tres cosas: primero, que ya decidió competir por la presidencia en el 2019, tal y como lo anunció en octubre del 2017 y para lo cual está creando su propio movimiento. Segundo, que esta aspiración personal de llegar a ocupar la silla presidencial comenzó a trabajarla inteligentemente desde que inició su vida pública en la política vernácula. Tercero, que para un porcentaje significativo de la población, Bukele representa una alternativa novedosa a los partidos tradicionales entre los que, por méritos propios, ya se incluye al FMLN.

Pero muchas otras interrogantes sobre este personaje quedan irresueltas. ¿Realmente Bukele aspira a algo que vaya más allá de su proyecto personal? ¿Podrá construir una plataforma electoral que le dé cobertura a su candidatura en el territorio nacional? ¿Tiene Bukele un plan para el país? Distanciarse de los partidos tradicionales es un buen punto de partida, pero no es suficiente para transformar el país. Para ello hay que tener un plan y, sobre todo, un equipo que responda por su implementación. Experiencias recientes en países cercanos coinciden con la aspiración de los salvadoreños a una clase política distinta a la tradicional. En Guatemala, la gente votó por un personaje que no estaba curtido en la política —Jimmy Morales— y parece que la apuesta no resultó buena. En Honduras, la población acaba de votar por un rostro nuevo —Salvador Nasralla—, al que un descarado fraude electoral, avalado por los Estados Unidos, impidió asumir la presidencia. Un fenómeno parecido parece que quiere encabezar Bukele en El Salvador, pero, para ver si lo consigue, hay que esperar no mucho tiempo. En esta misma línea de distanciamiento de los políticos tradicionales, hay que inscribir también al diputado de ARENA

Johnny Wright Sol, quien ganó notoriedad al criticar a su mismo partido y renunciar a la reelección por el autoritarismo que impera en el partido de derecha. Hay que esperar el derrotero de su futuro político que podría inscribirse dentro de los que aparentemente quieren emprender un nuevo rumbo.

¿Dónde está la esperanza?

Es difícil encontrar signos de esperanza en medio de un panorama que pinta tan desalentador. Pero este pueblo necesita creer, confiar... Quizá demasiado tiempo hemos estado buscando eso fuera de nosotros mismos. Arriba dejé apuntado que el pueblo salvadoreño parece tomar conciencia de la necesidad de un giro importante en la manera de hacer política. Y si bien la situación del país se ve entre nubarrones y el juicio de la gente es casi implacable con los que tienen o han tenido alguna responsabilidad en ello, también es cierto que la población parece estar más dispuesta a apoyar causas y proyectos de beneficio para la mayoría. En marzo del 2017, se aprobó una ley que prohíbe la minería metálica industrial, proyecto que fue apoyado desde antes por la mayoría de la población, que se dio cuenta de que esta industria es nociva para el país y su gente. En la encuesta de evaluación del 2017 del IUDOP, 82 de cada 100 encuestados opinaron que es urgente que se reconozca en la Constitución el derecho humano al agua, un derecho que fue reconocido por las Naciones Unidas desde el 2010, pero que en El Salvador, los diputados y las diputadas, especialmente de derecha, han bloqueado hasta el momento. También 72 de cada 100 encuestados creen que la institucionalidad del agua debe estar en manos de entidades estatales, porque el agua es un bien público y el Estado es el último garante para que el derecho humano al agua se cumpla en el país. Pero los diputados parecen tener oídos sordos a estos clamores de la gente. Por estas actitudes, la población los tiene en el sótano de la desconfianza

4 Pronunciamento de la UCA "Un llamado a la responsabilidad", de 26 de enero del 2018, disponible en http://uca.edu.sv/noticias/texto-5258_

y amenaza con llevarlos a unas elecciones que se celebren solo entre sus más cercanos seguidores.

Las encuestas solo miden percepciones de las personas, no la realidad en sí misma. Pero las elecciones las deciden las personas y su percepción de la realidad va con ellas a votar. Por eso los políticos, en lugar de despotricar cuando una encuesta no les favorece, bien harían en poner atención a lo que la gente demanda. Además, esta encuesta refleja con bastante fidelidad lo que vive nuestro país. “Situación límite” le ha llamado la UCA⁴, no con un sentido alarmista o apocalíptico, sino en el sentido en que lo entendía Ignacio Ellacuría, una realidad ante la que no podemos ser indiferentes ni quedarnos pasivos. Urge devolver a la gente en qué confiar, en quién creer, y hay que comenzar devolviéndole la confianza en ella misma, en su capacidad, en su buen juicio para decidir quién la representa. Eso se logra con participación, con la generación de oportunidades para todos, con la dignificación de las personas y de la política; todas ellas, realidades aún por construir en El Salvador.